

Vivienda social en tiempos de crisis:
sobre las varias crisis vividas en el pasado reciente

CARLOS SAMBRICIO

EN TORNO a la segunda mitad del siglo XIX, la Revolución industrial no sólo transformó la ciudad histórica sino que también cambió la imagen que hasta entonces existía de la ciudad capital. El hecho de que se produjera una fuerte emigración hacia los grandes núcleos urbanos (que éstos, en consecuencia, experimentarían un importante incremento demográfico) hizo que –ante la necesidad de alojar a la nueva población– la primera reacción fuera dividir y compartimentar (tugurizar, en una palabra) los viejos caserones históricos, convirtiendo la ciudad histórica en contenedor de miseria. Ante esta situación –máxime cuando poco antes se había cerrado el último proceso desamortizador, liberando suelo en el interior del casco– hubo quienes (los nuevos propietarios de suelo) propusieron llevar las nuevas clases fuera de la ciudad (construyendo extramuros imprecisos barrios obreros) y manteniendo el casco para sus antiguos poseedores y hubo también quienes, por el contrario, optaron por construir la ciudad de la burguesía fuera del límite de las murallas. Sucedió que frente a un capital conservador (quienes habían invertido sus ahorros en la compra de una casa del casco, con idea de vivir de la renta obtenida por su alquiler) fue el capital inmobiliario quien consiguió edificar los ensanches, planteando así un más que singular quiebro en la forma de entender qué debía ser la ciudad histórica y qué la ciudad de la nueva clase.

El gran éxito de este capital inmobiliario fue conseguir la construcción de la ciudad liberal, de forma tal que a partir de este momento los trabajos de infraestructura llevados a término se realizaron no en función de los intereses de la colectividad sino que fueron acometidos, con fondos públicos, a partir de la iniciativa del privado y buscando claramente su beneficio. Fue así como se acometieron obras de alineaciones, alcantarillado, empedrado, traídas de aguas o iluminación (todas ellas realizadas por compañías privadas) consiguiendo-

se además la aprobación de los planes de ensanche, propuesta urbana que no sólo zonificaba por usos sino que marcaba un límite al desarrollo de la ciudad. La primera reacción del capital inmobiliario (banca, Corona o Iglesia) fue comprar grandes cantidades de suelo con intención no ya de construir y ponerlo en mercado sino, por el contrario, con voluntad por retener, incentivar la demanda y obtener así grandes beneficios. El Ensanche, pese a cuanto habían declarado sus partidarios, supuso la expulsión fuera del nuevo límite –hacia espacios más baratos– de aquella emigración que precisaba de suelo donde vivir. Y fue entonces, en los momentos finales del XIX y comienzos del XX, cuando se produjo el segundo gran quiebro en la cultura arquitectónica, al abrirse el debate tanto sobre cómo debía ser la nueva vivienda obrera como sobre los mecanismos que fijaran el acceso a las mismas. Compartimentar las viviendas del casco histórico, con objeto de alojar una familia en una sola habitación agravó al máximo las condiciones de higiene de aquellos inmuebles, tugurizando la que, hasta poco antes, era el área representativa de la ciudad. Buscando paliar esta situación se inició, desde planteamientos reformistas, el debate tanto sobre cuáles debían ser las características de las nuevas viviendas como sobre dónde ubicar las mismas. Y fue entonces cuando, por vez primera, se establecieron normas que definían no sólo el espacio de las viviendas obreras, sino también pautas que marcaban cuál debería ser el acceso a la vivienda.

El comienzo de siglo marcó, en consecuencia, un cambio en la forma de entender el problema: si el XIX había debatido sobre la existencia o no de barrios obreros, proponiendo una zonificación de uso en los nuevos ensanches, en los primeros años del nuevo siglo el problema se planteó tanto desde la reflexión arquitectónica como desde el reformismo político de quienes buscaban sentar las bases de una nueva “paz social”. Ciertamente

que el Plan Cerdá había esbozado las características de la vivienda obrera en Barcelona: pero no es menos cierto que en aquella excepcional propuesta nunca se planteó el debate sobre qué debía ser el programa de necesidades o cuáles las características de las cocinas, dormitorios, estar o baños. El gran cambio aparece cuando la construcción de las viviendas obreras se plantea tanto desde la arquitectura como desde el urbanismo: se debate sobre construir o no ciudades jardín alejadas de la gran urbe, integradas bien en planes regionales o en planes comarcales: alejadas de la gran urbe, la polémica se abre sobre si deben construirse ciudades satélites o, por el contrario, sobre si conviene construir barrios periféricos jardín (ciudades jardín) o barrios jardín en el interior del límite de la metrópolis. Aparece así una burguesía que, deseosa de seguir los modelos marcados por la experiencia alemana o inglesa, reclama las barriadas jardín con viviendas de gran lujo en barriadas situadas dentro del Ensanche (los parques urbanizados) al tiempo que, fuera del límite, las barriadas jardín se plantean como reducto de una clase trabajadora que busca –a costa de alejarse del centro urbano– una vivienda económica e higiénica.

Simultáneamente se proyectan ciudades satélites, ciudades jardín, barrios jardín y colonias de casas baratas; cada uno de estos planteamientos se define desde una reflexión propia: si para la ciudad satélite el problema prioritario es la existencia de un transporte colectivo que comunique el núcleo periférico con el lugar de trabajo, en la barriada jardín o en el suburbio jardín el problema no sólo será definir el programa de necesidades de la nueva vivienda sino también establecer una pequeña parcela verde que, desde los supuestos autárquicos de esos años, se entiende como posible huerto familiar. No son estos los únicos problemas que caracterizan esta nueva arquitectura: junto a los problemas de arquitectura y los problemas urbanos aparecen problemas de gestión, planteamientos económicos sobre cómo conseguir economizar la construcción y, por

último, se debatirá sobre la conveniencia de abandonar la propuesta de viviendas unifamiliares para edificar, en el interior del Ensanche, grandes bloques de alta densidad. Pero el gran cambio aparece cuando, desde la arquitectura, se abre la reflexión sobre cuatro aspectos bien concretos: definir la célula desde lo que la vanguardia europea llamará el “espacio mínimo”; establecer el programa de necesidades que debe cumplir el bloque, proponiéndose la existencia de equipamientos comunes; definir nuevos sistemas constructivos encaminados a abaratar la construcción y, por último, fijar unas pautas claras que asignen al Estado, ayuntamientos, sindicatos y empresas la responsabilidad en la construcción de viviendas económicas.

Comienza a debatirse qué tipo de vivienda conviene construirse en cada momento; cuál debe ser el programa de necesidades en función del número de habitantes: se analizan las viviendas de doble crujía en las que las habitaciones de vida se orientan hacia las zonas verdes, mientras que los servicios se disponen opuestos a éstos; se analizan las circulaciones y se experimenta sobre cómo disminuir el espacio distribuidor. Si en los comienzos del siglo se sustituyó la habitación única “multifunciones” característica de los tugurios decimonónicos por viviendas higiénicas y económicas donde, por vez primera, las cuatro piezas antes citadas (baño, dormitorio, cocina y estar) aparecían –desde supuestos higienistas– claramente diferenciadas ahora, en los finales de la década de los veinte la preocupación era diseñar al detalle cada una de estas cuatro piezas. La cocina se convertía, tras la reflexión iniciada en Frankfurt, en laboratorio donde –desde la economía del gesto– se buscaba racionalizar cada movimiento; estar y dormitorios se valoraron desde la reflexión que suponía definir a los primeros como “habitaciones de día” y a los segundos como “habitaciones de noche”, bastando, en consecuencia, diseñar muebles empotrados que posibilitasen transformar la función de una habitación en otra...



Se abrió una importante discusión política entre quienes entendían que la construcción de las viviendas económicas era competencia del Estado o de los ayuntamientos, quienes, por el contrario, mantenían que edificar éstas era competencia de empresas y los sindicatos obreros. Desde los supuestos de la socialdemocracia austriaca se reclamó, para los ayuntamientos, la constitución de una oficina de proyectos cuya misión fuera dar solución a las necesidades existentes en la ciudad; paralelamente se exigió la constitución de un banco municipal capaz de conceder créditos para la construcción de estas viviendas, a ello se unió la reivindicación de una empresa constructora municipal capaz de ejecutar los proyectos citados y, por último, la creación de una empresa de gestión municipal. Buscando reducir costes en la construcción se abrió la reflexión sobre la posible estandarización de los elementos constructivos, aplicándose a la construcción de la arquitectura social las pautas marcadas por las corrientes tayloristas y, poco más adelante, se propuso complementar la estandarización por la introducción de criterios de industrialización.

Entre 1918 y 1939 la arquitectura de la vanguardia quedó caracterizada tanto por las respuestas dadas a la construcción de viviendas sociales como a la forma de actuar y reaccionar frente al problema. Hubo múltiples enfoques, se introdujeron numerosas variables y se produjeron vaivenes políticos y económicos de forma tal que pese a existir una línea coherente de razonamiento, cada país tuvo que hacer frente a sus propias circunstancias históricas. Alemania cambió en noviembre de

1932, tras la llegada al poder del Partido Nacional Socialista; la Viena austro-marxista quedaría reducida, tras la forzada integración en el Reich, a nada; y en la Rusia soviética los cambios surgidos del primer plan quinquenal dieron al traste con las propuestas esbozadas poco antes por Ginzburg.

También España vivió la singularidad de los grandes proyectos y conoció, a su vez, la crisis en la construcción. En 1921 el país vivió una singular euforia, aprovechando la bonanza de los años de neutralidad, situación que fue al traste apenas dos años después, obligando al Estado a formalizar un pacto (lo que fue el denominado “Congreso de la Edificación”) y que tuvo como consecuencia sustituir la acción del sector público en la construcción de viviendas sociales favoreciendo al sector privado a través del llamado “estatuto municipal”. Apenas ocho años más tarde se produjo una nueva crisis, motivada esta vez tanto por la recesión que supuso en toda Europa la crisis de 1929 como por la proclamación de la nueva República, por cuanto que se generó la desconfianza de los inversores españoles que –buscando erosionar la política del nuevo gobierno– descapitalizaron la economía, reduciendo al mínimo su actividad edilicia y provocando un parón en la edificación que puso en jaque al Gobierno central, obligando a Indalecio Prieto a adoptar políticas keynesianas de déficit público, al afrontar grandes proyectos de Estado y deber, en consecuencia, abandonar las obras municipales. En torno a 1936 el debate se había hecho, pese a todo, enormemente rico

por cuanto que la propia administración, ante la falta de fondos, tuvo que ir más allá de la norma definiendo lo que debían ser las casas ultrabaras, alternativas urbanas a las propuestas de viviendas económicas rurales que Prieto concibiera en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas y que se reflejarán en los concursos para los poblados en las márgenes del Guadalquivir y el Guadalmellato.

La Guerra Civil cambió la situación: destruidas las industrias urbanas, el Régimen buscó refugio, con su política autárquica, en el campo y durante muchos años las referencias a las “viviendas sociales reconstruidas” no fueron sino frases vacías que, todo lo más, se referían bien a las viviendas para los funcionarios, a las casas para militares o a las edificadas para determinados obreros de la Organización Sindical. Las cifras y cuadros estadísticos que conocemos, publicados tanto por la Fiscalía de la Vivienda como por la propia Organización sindical muestran un hecho evidente: el fracaso de la política autárquica hizo que la reconstrucción en las grandes ciudades sólo comenzara a afrontarse en torno a 1949, asignándose a la Obra Sindical del Hogar, el Instituto Nacional de la Vivienda, Instituto Nacional de Colonización o a la Dirección General de Regiones Devastadas unas directrices imprecisas en el contenido arquitectónico, difusas en lo referente a las actuaciones urbanas y sólo tajantes y precisas en lo que respecta al acceso a la vivienda.

España vivió, entre 1949 (la V Asamblea Nacional de Arquitectos) y las pautas marcadas por el Primer Plan de Desarrollo un momento más que excepcional en el que los promotores públicos buscaron –en alguna medida– retomar la reflexión y las experiencias realizadas en los años anteriores a la Guerra. Los barrios construidos en Barcelona con motivo del Congreso Eucarístico, los poblados de absorción, dirigidos o mínimos edificados en Madrid, las pautas formuladas en 1954 por Cabrero como alternativa a las ordenanzas anterior-

mente existentes, la experiencia del concurso de vivienda de 1957..., hacen de aquella década oscura uno de los más brillantes momentos de la historia de la arquitectura española. Frente a la arquitectura triunfalista del Régimen, la humilde arquitectura de viviendas sociales, el poblado construido en entrevías por el Hogar del Empleado, las viviendas en Córdoba de Rafael de la Hoz, el poblado de Otxarkoaga..., marcan un punto de arranque que se vería detenido en 1957 cuando el gobierno franquista –consciente de la imposibilidad de resolver las necesidades sociales del país en materia de vivienda– cedió sus competencias trasvasando la responsabilidad de la vivienda social a un sector privado que aprovechó para iniciar una política especulativa, despreocupándose por completo de la reflexión sobre qué debía ser la célula, cuál el bloque y cómo entender el nuevo modelo de ciudad.

En las páginas que siguen se presenta, de forma detallada, el estudio de cada uno de estos momentos. Cabría decir que la historia de la arquitectura española del siglo xx tiene uno de sus momentos de mayor esplendor en las distintas soluciones ofrecidas por quienes construyeron las viviendas de promoción pública. Con los vaivenes comentados, con las contradicciones apuntadas y desde las tensiones que refleja la propia historia política, el cambio que experimenta España a partir de 1975 abre la puerta a un momento especialmente importante en el que por encima del problema del acceso a la vivienda hoy se plantea y entiende cuanto la disciplina tiene de capacidad para resolver problemas y plantear alternativas.

Hubo años en los que la vivienda social se entendió como un tema menor: la “gran” arquitectura se entendía como arquitectura de “hitos”, fueron estos equipamientos o conjuntos construidos para la gran burguesía. Desde hace unos años lo que ocurre es precisamente lo contrario: el interés se vuelca en la organización en planta de la vivienda social concientes sus responsables

de que en los momentos que transcurren entre el fin de siglo y el nuevo hay valores (sin querer entrar en debate sobre cómo o de qué manera se produjo el cambio) que son puestos en cuestión y propuestas que hace muy pocos años eran rechazadas por ilusorias hoy se comentan y discuten como posibles. Todos sabemos los cambios que se han producido en la familia y somos igualmente conscientes de cómo la mirada vuelve atrás y en algún punto reclama la tradición esbozada antes de la

Guerra, cuando el bloque de viviendas se complementaba con dotaciones tales como lavanderías, comedores comunes, espacios colectivos, guarderías...

De alguna forma el momento actual retoma el pasado o, lo que es lo mismo, reclama entender. Por esta razón el estudio de la historia de la vivienda social abre puertas para entender cómo los nuevos planteamientos sustituyen opciones obsoletas, cómo la búsqueda de soluciones alternativas es reflejo del largo caminar de la arquitectura.